



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

En el presente proceso ordinario laboral instaurado por la señora NURY DEL SOCORRO MAYA OROZCO contra la ACP COLPENSIONES, radicado **001 2017 00799**, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello dispuso la remisión a éste Tribunal con el fin de surtir el grado jurisdiccional de CONSULTA, a propósito de la sentencia anticipada proferida el 13 de julio de 2020, mediante la cual absolvió a la entidad demandada de las pretensiones incoadas en su contra.

No obstante, la Sala advierte que en el trámite procesal adelantado se configuran varias causales de nulidad como pasará a analizarse.

La demanda fue presentada por la señora NURY DEL SOCORRO MAYA OROZCO en contra de COLPENSIONES pretendiendo que, previa declaratoria del derecho, se condenara a dicha entidad al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por compañero permanente a cargo, así como la indexación de las condenas y las costas del proceso (fl.3).

Admitida la demanda y luego de las respectivas notificaciones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, formuló solicitud de sentencia anticipada con fundamento en la sentencia SU-140 de 2019, considerando que *"... No tiene ningún sentido, seguir discutiendo un asunto sobre el cual la Corte Constitucional ya se pronunció, que lo único que genera es desgaste y congestión judicial..."*. (fls. 74/79)

Por ser un proceso de única instancia y como la sentencia resultó adversa a los intereses de la demandante, quien ostenta la calidad de

pensionada, se ordenó el envío del proceso a la presente corporación para conocer del grado jurisdiccional de la consulta.

CONSIDERACIONES

El artículo 278 del Código General del Proceso, establece de manera taxativa los eventos en los cuales se puede acudir a la figura procesal de la sentencia anticipada, precepto que en su tenor literal consagra:

“Artículo 278. Clases de Providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

(...)

En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

- 1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.*
- 2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.*
- 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa”.*

En el procedimiento laboral y de la seguridad social no se encuentra consagrada expresamente esa posibilidad de dictar sentencia anticipada, sin embargo, no es posible concluir de plano la improcedencia de dicha figura, primero porque no se encuentra prohibida y, segundo, porque sería desconocer el carácter supletorio de las disposiciones del Código General del Proceso en el trámite laboral, en virtud del principio de integración normativa y conforme lo dispone el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, así como el artículo 1º del Código General del Proceso, en concordancia con el mandato del artículo 4º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el artículo 48 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, atendiendo esto, a que la finalidad de la

sentencia anticipada no es otra que materializar los principios de celeridad y economía procesal.

Así que, si se acepta procedente la sentencia anticipada en materia laboral, se analizará la pertinencia según corresponda, teniendo en cuenta que se debe presentar una de las tres causales anteriormente descritas.

Analizado el trámite puesto a consideración, se observa que no se presenta ninguno de los supuestos del aquel artículo 278 para admitir su procedencia. Frente a la primera de las causales, la solicitud presentada solo proviene de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sin que se pueda observar manifestación alguna en cuanto a que se trate de una solicitud presentada por las partes de común acuerdo o que fuera coadyuvada por estas una vez fue puesta en traslado.

Respecto de la segunda de las causales, se debe señalar que, al tratarse de un proceso de única instancia, la etapa probatoria se agota en la audiencia de que trata el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que consagra *“AUDIENCIA Y FALLO. En el día y hora señalados, el juez oirá a las partes y dará aplicación a lo previsto en el artículo 77 en lo pertinente. Si fracasare la conciliación, **el juez examinará los testigos que presenten las partes y se enterará de las demás pruebas y de las razones que aduzcan. Clausurado el debate**, el juez fallará en el acto, motivando su decisión, contra la cual no procede recurso alguno(...)”*; etapa que tal como se evidencia en el expediente, no se realizó, y al tratarse de un proceso en el que se solicitan los incrementos pensionales de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se requiere la acreditación de la convivencia y dependencia económica del cónyuge o compañero(a) permanente respecto del pensionado(a), pues así lo exige la norma que los consagra; en consecuencia, es necesaria la práctica de pruebas en ese sentido.

Al respecto sobre la inexistencia de pruebas por practicar, invocada por el juez primario, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC-3529 del 20 de marzo de 2019, señaló:

"Bajo esa perspectiva, el legislador le impuso al juez la obligación de poner fin a las controversias con prontitud en los eventos en que es innecesario agotar otras etapas o diligencias para definir una situación jurídica, lo cual, guarda armonía con los principios de eficiencia y celeridad de la administración de justicia.

Pero, la obligación de culminar la causa con premura, en particular cuando «no hubiere pruebas por practicar», debe ser aplicada con prudencia, pues, el juez no puede omitir la práctica de un elemento de convicción fundamental para la decisión definitiva, ya que vulneraría el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia de las partes.

Por tal razón, al hacer uso del deber de dictar sentencia anticipada, la autoridad judicial está obligada a evaluar las particularidades de la controversia, la pertinencia y la conducencia de los medios de convicción solicitados en la causa y si resulta pertinente la práctica de otros con trascendencia en el asunto, para establecer si es posible en el escenario del proceso, tomar una decisión ajustada al ordenamiento jurídico"

No se trata entonces de un asunto de puro derecho y por lo tanto el Juez solo podía pretermittir la etapa probatoria a través de un juicio previo de inconducencia, pertinencia o inutilidad de la prueba, lo cual debe efectuarse en la etapa de decreto de pruebas, la que tal y como se señala, no se adelantó.

Finalmente, frente a la última de las causales, se debe mencionar que dichas figuras no se presentan en el caso específico. Sin embargo, advierte la Sala que, con relación a las excepciones de cosa juzgada y prescripción, aquellas tienen en materia laboral regulación expresa en el artículo 32 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 1º de la Ley 1149 de 2007, normativa que impone que se resuelvan en la etapa procesal de las excepciones previas, sin dar lugar a una sentencia anticipada.

De otro lado, debe resaltarse que la expedición de la sentencia SU-140 de 2019, no constituye una causal de sentencia anticipada, pues no es la valoración previa, de la no prosperidad de una pretensión, la que faculta al fallador para pretermittir la etapa probatoria y proferir sentencia anticipada, adicional que por mandato del artículo 230 de la Constitución Nacional los jueces, “...sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, **la jurisprudencia**, los principios generales del derecho y la doctrina **son criterios auxiliares de la actividad judicial**”, posición jurisprudencial, que por demás no es un tema pacífico en las altas cortes.

Al no ser procedente la sentencia anticipada en el sub lite, el funcionario de primer grado incurrió en varias de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso, específicamente en las consagradas en los numerales, 2° que establece: “...Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.”; el 5° que consagra “... Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria” y el 6° que señala “... Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o recorrer su traslado”.

Nulidades que conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 136 del Código General del Proceso, son insaneables, en tanto al proferir el juez la sentencia anticipada, sin agotar la audiencia de que trata el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, donde se evacua la etapa probatoria y se da traslado a las partes para alegar, se entiende que pretermittió la instancia.

Tampoco se puede pasar por alto, que pese a que la sentencia anticipada conlleva la supresión de etapas procesales que resultan innecesarias, esto no constituye una excepción al principio de

oralidad, que en materia laboral es inexcusable en los términos del artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que dispone “*Las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias, se efectuarán oralmente en audiencia pública, **so pena de nulidad**, salvo las que expresamente señalen la ley...*”. Así pues, al ser proferida la sentencia que puso fin al proceso de forma escrita, se incurrió igualmente en una nulidad procesal.

En esas condiciones, la Sala considera necesario corregir el trámite del proceso, debiéndose declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto del 9 de marzo de 2020 por medio del cual se puso en traslado de las partes la solicitud de sentencia anticipada presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ordenándose en su lugar al juez de conocimiento continuar con el trámite correspondiente según lo ordena la ley.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, **DECLARA LA NULIDAD** de lo actuado a partir del auto del 9 de marzo de 2020 inclusive. En consecuencia, se ordena al juez de conocimiento continuar con el trámite correspondiente según lo explicado en la parte considerativa de esta decisión.

Se ordena notificar lo resuelto por ESTADOS.

Acta N° 143

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 113
del 30 de junio de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9377c30d4746503c24e06953ba2f0fab1f3472edfef78c4bd3053b5b3173522d**

Documento generado en 29/06/2021 11:33:14 AM